



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, tres (03) de noviembre de dos mil veinte (2020).

| | |
|-----------------------|---|
| Magistrado Ponente: | OMAR EDGAR BORJA SOTO |
| Medio de Control | ACCIÓN POPULAR |
| Ref. Proceso | 76001-23-33-000-2020-01371-00 |
| Demandante | Andrea Elizabeth Cárdenas Cortes andreacardenas@gmail.com dragadosinpeaje@hotmail.com |
| Demandado | Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI”) buzonjudicial@ani.gov.co Ministerio de Transporte notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co Instituto Nacional de Vías –INVIAS njudiciales@invias.gov.co Ministerio de Hacienda notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co |
| Terceros interesados: | Cámara de Comercio de Buenaventura info@ccbun.org Comité Intergremial e Interempresarial De Bueanventura comiteintergremialbuenaventura@gmail.com Alcaldía Distrital De Buenaventura dir_juridico@buenaventura.gov.co Sociedad Portuaria Regional De Buenaventura S.A gerencia@sprbun.com Sociedad Portuaria Terminal De Contenedores De Buenaventura S.A. correspondencia.oficial@tcbuen.com Sociedad Puerto Industrial de Agua Dulce S.A. aguadulce@puertoaguadulce.com Pilotos Prácticos Del Pacífico S.A.S informacion@pilotosdelpacifico.com Servicios De Pilotaje de Buenaventura S.A spilbun@spilbun.com |
| Asunto | Admite y vincula |

Auto Nro. 308

ANTECEDENTES

La abogada Andrea Elizabeth Cárdenas Cortes actuando en nombre propio instaura el presente medio de control de acción popular en contra de i) la Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI”); ii) el Ministerio de Transporte; iii) el Instituto

Nacional de Vías –INVIAS y iv) el Ministerio de Hacienda al considerar que existe una “amenaza inminente” de los derechos colectivos a la moralidad administrativa (Literal b, Artículo 4, Ley 472 de 1998), el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público (Literal d, Artículo 4, Ley 472 de 1998), el derecho de los consumidores y usuarios (Literal n, Artículo 4, Ley 472 de 1998) y la defensa del patrimonio público (Literal 3, Artículo 4, Ley 472 de 1998) por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura **con el proyecto de Asociación Pública Privada de Iniciativa Privada que tiene por objeto la “Profundización y Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Buenaventura”** presentado por la promesa de Sociedad Futura Buenaventura.

Con fundamento en lo anterior, se procederá a verificar los requisitos de la demanda, en los siguientes términos:

1. JURISDICCIÓN.

Conforme al artículo 104 del CPACA la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Aunado a ello, la Ley 472 de 1998 que regula lo relativo a la acción popular, indica:

“ARTÍCULO 15.- Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.”

Es así como se puede establecer que esta jurisdicción ostenta la jurisdicción para conocer del presente medio de control, atendiendo la calidad de entidades públicas que ostenta la parte accionada.

2. COMPETENCIA.

El artículo 152 del CPACA, dispone sobre la competencia funcional para conocer de la acción:

“Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(...)

16. **De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos**, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, **contra las autoridades del orden nacional** o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.

La acción es dirigida, *entre otras*, en contra de entidades nacionales por lo que la competencia es de la presente Corporación.

3. PROCEDENCIA.

El art. 9 de la Ley 472 de 1998, contempla:

“ARTÍCULO 9º.- Procedencia de las Acciones Populares. Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.”

Con fundamento en los hechos y pretensiones de la demanda, se establece que a criterio de la accionante, la aprobación de la etapa de factibilidad del proyecto de Asociación Pública Privada de Iniciativa Privada que tiene por objeto la “Profundización y Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Buenaventura” presentado por la promesa de Sociedad Futura Buenaventura Puerta del Pacífico, compuesta por JAN DE NUL N.V y FANALCA S.A radicado el 12 de diciembre de 2018 con código de identificación PRY00878, pone en inminente peligro la vulneración de los derechos colectivos ya señalados; toda vez que, **si se llegase a aprobar la factibilidad**, se desatarían las graves consecuencias para Buenaventura y el país.

4. REQUISITOS FORMALES

4.1 LEGITIMACIÓN POR ACTIVA.

“ARTÍCULO 12.- Titulares de las Acciones. Podrán ejercitar las acciones populares:

1. Toda persona natural o jurídica.
2. Las organizaciones No Gubernamentales, la Organizaciones Populares, Cívicas o de índole similar.
3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se hayan originado en su acción u omisión.
4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y municipales, en lo relacionado con su competencia. Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215 de 1999

5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos o intereses. Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215 de 1999

ARTÍCULO 13.- Ejercicio de la Acción Popular. Los legitimados para ejercer acciones populares pueden hacerlo por sí mismos o por quien actúe en su nombre.

En el presente acude como titular de la acción una persona natural Andrea Elizabeth Cárdenas Cortes, por lo que existe legitimación por activa para tales fines.

4.2 LEGITIMACIÓN POR PASIVA.

“ARTÍCULO 14.- Personas Contra Quienes se Dirige la Acción. La Acción Popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. En caso de existir la vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, corresponderá al juez determinarlos.”

En principio las entidades accionadas cuentan con facultad para ser citadas a la acción popular.

4.3 REQUISITOS FORMALES

“ARTÍCULO 18.- Requisitos de la Demanda o Petición. Para promover una acción popular se presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos:

- a) La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado;
- b) La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición;
- c) La enunciación de las pretensiones;
- d) La indicación de la persona natural o jurídica, o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;
- e) Las pruebas que pretenda hacer valer;
- f) Las direcciones para notificaciones;
- g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción.”

El actor cumple con la totalidad de los requisitos formales de la solicitud del presente medio de control.

4.4 REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

Sumado a lo anteriores requerimientos de la Ley 472 de 1998, la Ley 1437 de 2011 señala en su artículo 144:

“Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.”

De modo que, de manera previa a instaurar la acción, la parte actora debe acudir a quien considera es el generador de la afectación de los derechos colectivos para solicitar la protección de los mismos.

Conforme a las pruebas arrojadas al plenario se acredita a folio 194 a 197 que la actora agotó previamente el mencionado requisito remitiendo la solicitud previa mediante mensaje de texto a los accionados el 11 de septiembre de 2020, con lo que se tiene por agotado el mismo.

Por último, es importante precisar que la parte actora **no refiere las razones jurídicas o fácticas de tener como “terceros” a las entidades:** Cámara de Comercio de Buenaventura, Comité Intergremial e Interempresarial De Buenaventura, Alcaldía Distrital de Buenaventura, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A, Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A., Sociedad Puerto Industrial de Agua Dulce S.A., Pilotos Prácticos del Pacífico S.A.S y Servicios de Pilotaje de Buenaventura S.A, lo que hace imposible para este Despacho pronunciarse al respecto a efectos de establecer la relación jurídica de los mismo; No obstante, se procederá a poner en conocimiento a las citadas entidades de la demanda y la presente providencia, para que si a bien lo tienen, manifiesten si es de su interés acudir como coadyuvantes o impugnantes en los términos del art. 24¹ de la Ley 472 de 1998.

Por lo anterior, el despacho,

RESUELVE

¹ **COADYUVANCIA.** Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones, antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del Pueblo o sus delegados, los Personeros Distritales o Municipales y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos.

1.- ADMITIR la presente acción popular instaurada por Andrea Elizabeth Cárdenas Cortes actuando en nombre propio instaura el presente medio de control de acción popular en contra de i) la Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI”); ii) el Ministerio de Transporte; iii) el Instituto Nacional de Vías –INVIAS y iv) el Ministerio de Hacienda.

2.- PONER EN CONOCIMIENTO del presente auto y de la demanda, a las entidades: Cámara de Comercio de Buenaventura, Comité Intergremial e Interempresarial De Buenaventura, Alcaldía Distrital de Buenaventura, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A, Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A., Sociedad Puerto Industrial de Agua Dulce S.A., Pilotos Prácticos Del Pacífico S.A.S y Servicios de Pilotaje de Buenaventura S.A., para que si a bien lo tienen, manifiesten si es de su interés acudir como coadyuvante en los términos del art. 24 de la Ley 472 de 1998.

3.- NOTIFICAR personalmente el presente auto y la demanda como dispone el art. 21 de la ley 472 de 1998 a los accionados y al Ministerio Público. El referido término de 10 días, correrá al vencimiento de los 25 DÍAS previstos en el art. 199 de la Ley 1437 de 2011, en la forma señalada en la sentencia de unificación del 18 de marzo de 2018 radicado 2500023420002017-03843-01 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

4.- COMUNICAR a la Defensoría del Pueblo como dispone el inciso 2 del art. 13 de la ley 472 de 1998, por las razones allí enunciadas.

5.- OFÍCIESE a la i) la Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI”); ii) el Ministerio de Transporte; iii) el Instituto Nacional de Vías –INVIAS y iv) el Ministerio de Hacienda y a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, para que en las páginas web institucionales cuelguen un LINK acerca de la acción popular de la referencia que dirija (hipervínculo) al extracto de la demanda que será elaborado y enviado por la Secretaría del Tribunal. El link deberá permanecer disponible en la página web de las entidades y redirigir al extracto de la demanda durante al menos 15 DÍAS ENTRE LA FIJACIÓN Y SU DESFIJACIÓN, de ello dará cuenta al Tribunal el administrador del sitio web, con lo anterior, se entenderá superado la fijación del aviso de que trata el Art. 21 Ley 472 de 1998.

6.- DISPONER, de conformidad con el art. 22 de la ley 472 DE 1998, el traslado a los accionados de la demanda por el término de diez (10) días para contestarla, e informarles que la sentencia será proferida dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término de traslado, y que tienen por tanto derecho a

solicitar la práctica de pruebas con la contestación de la demanda, debiendo allegar las que se encuentren en su poder.

7-. LIBRAR las comunicaciones de ley. En lo no previsto por la ley 472, aplíquese la ley 1437, excluyendo en todo caso el procedimiento ordinario en lo que tiene que ver con sus etapas. Dese cumplimiento por Secretaría.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

El Magistrado,



OMAR EDGAR BORJA SOTO